

FAHCE - BIBHUMA

N° Inv: 52231

Sig. Top: 982.12 DEL

Fecha de alta: 24-5-13

Ternavasio, Marcela

Historia de la provincia de Buenos Aires: de la organización federal a la federalización de Buenos Aires : 1821-1880 . - 1a ed. - Buenos Aires : Edhasa; Gonnet: UNIPE: Editorial Universitaria, 2013. 416 p. ; 22.5x15.5 cm.

ISBN 978-987-628-217-8

1. Historia de la provincia de Buenos Aires. CDD 982.12

Imagen de tapa: Carlos Pellegrini, *Pulpería de esquina en Buenos Aires*, 1830, acuarela, colección privada.

Diseño de tapa: Eduardo Ruiz

Diseño y realización de mapas: Mgter. Santiago Linares y Lic. Inés Rosso, Centro de Investigaciones Geográficas, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina. Aprobado por el Instituto Geográfico Nacional, Expediente GG12 0363/5, 13 de diciembre de 2012.

Las imágenes de las páginas 376 y 384 fueron cedidas por el Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Reggio Emilia, Italia (autorización N° 2478 x. 1.) Prohibida su ulterior reproducción.

Primera edición: marzo de 2013

© UNIPE: Editorial Universitaria, 2013
Camino Centenario 2565
(B1897AVA) Gonnet
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (0221) 484-2697
www.unipe.edu.ar

© Edhasa, 2013
Córdoba 744 2° C, Buenos Aires
info@edhasa.com.ar
http://www.edhasa.com.ar

Avda. Diagonal, 519-521. 08029 Barcelona
E-mail: info@edhasa.es
http://www.edhasa.es

ISBN: 978-987-628-217-8

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723

Impreso por Arcángel Maggio – División libros

Impreso en Argentina

Índice

Prólogo	9
<i>Marcela Ternavasio</i>	
Ensayo introductorio. Buenos Aires de 1820 a 1880: procesos, actores, conflictos	15
<i>Hilda Sabato</i>	
Primera Parte	
Capítulo 1. Las instituciones: orden legal y régimen político	47
<i>Juan Pablo Fasano y Marcela Ternavasio</i>	
Capítulo 2. La sociedad: población, estructura social y migraciones	73
<i>José Antonio Mateo</i>	
Capítulo 3. La economía: estructura productiva, comercio y transportes	117
<i>Julio Djenderedjian</i>	
Segunda Parte	
Capítulo 4. La política, entre el orden local y la organización nacional	153
<i>Fabio Wasserman</i>	
Capítulo 5. La justicia en la construcción del orden estatal	179
<i>Magdalena Candiotti y Melina Yangilevich</i>	
Capítulo 6. Finanzas públicas, puerto y recursos financieros	205
<i>Roberto Schmit</i>	

Ensayo introductorio.
Buenos Aires de 1820 a 1880:
procesos, actores, conflictos

Hilda Sabato

En el extremo sur del continente americano, la ruptura del vínculo colonial que ligaba a los territorios y las gentes de la región del Plata con el Imperio español desató transformaciones profundas en todos los planos de la vida en sociedad. Como ocurrió en toda Hispanoamérica, en el hasta entonces Virreinato del Río de la Plata se desarticulaban los lazos que habían mantenido sus regiones, instituciones y autoridades relativamente unidas entre sí, con los demás territorios virreinales y con la metrópoli. La ciudad que los españoles habían elegido como cabecera, Buenos Aires, lideró por algún tiempo el movimiento de independencia, a la vez que buscó recomponer la autoridad sobre nuevas bases y recuperar la articulación territorial bajo su égida. La soberanía del pueblo pronto fue aceptada como fundamento del poder político en buena parte del antiguo Virreinato, donde surgieron formas republicanas de gobierno para reemplazar la autoridad monárquica e imperial. Las aspiraciones a liderar la creación de una nación independiente que reuniera desde Charcas hasta Buenos Aires y del Paraguay a Mendoza, en cambio, fracasaron. En nombre del derecho de los pueblos a recuperar su soberanía, diferentes regiones reclamaron autonomía, en disputas que fueron dibujando cambiantes geografías.

Hacia 1820, diez años después de la revolución, esas disputas continuaban, y mientras en varios lugares de América Latina se seguía luchando contra las fuerzas españolas, en Buenos Aires las preocupaciones eran otras. La ciudad y el territorio aledaño ("la campaña") integraron la flamante provincia del mismo nombre y pasaron a formar parte de una experiencia nueva. Los ensayos por constituir una comunidad po-

lítica de soberanía única e indivisible habían fracasado y fueron reemplazados por una laxa confederación de estados semejantes, las provincias, cada una de las cuales se gobernaba de manera relativamente autónoma y compartía con las demás la promesa de constituir, a futuro, alguna asociación mejor definida y regulada por una constitución.

Así, Buenos Aires se organizó internamente como una república, parecida a sus vecinas y vinculada con ellas, pero a la vez autónoma. Este volumen comienza en ese momento y se extiende hasta 1880, otro año clave en el transcurso de una historia que no reconoce una trayectoria lineal sino que, por el contrario, muestra recorridos cruzados, algunos trancos, otros de largo aliento, y vicisitudes diversas, marcadas por las contingencias a la vez que insertas en procesos de temporalidades más largas. No hay un camino único anunciado en 1820 ni metas que se alcanzan en 1880. Más aún, esos años son apenas indicadores de momentos que los trascienden. Ellos marcan, a su vez, dos de los tantos hitos posibles en una periodización de la historia de la provincia.

Los hitos aquí elegidos están más vinculados a la trayectoria provincial que a la de la nación, aunque la primera forma parte de la segunda. Así, en 1821 se constituyó Buenos Aires como provincia autónoma: definió sus instituciones, proclamó sus límites y creó sus autoridades. A partir de entonces, y a pesar de algunos proyectos que buscaron dividirla o disolverla, tuvo existencia formal e institucional en el seno de los diferentes modelos nacionales que se propusieron a lo largo de la primera mitad del siglo XIX y, después de 1853, como una de las provincias de la República Argentina. Si bien su geografía y su gente cambiaron mucho a lo largo del tiempo, sólo en 1880 fue sometida a una amputación territorial que tendría vastas consecuencias: la ciudad de Buenos Aires, hasta entonces capital de la provincia y su principal centro político, económico y cultural, fue federalizada por ley del Congreso. Este acto institucional que dotó a la nación de una capital, sede del gobierno y lugar simbólico del Estado federal, fue impuesto por la fuerza, luego de una derrota militar en la que el ejército nacional se impuso sobre tropas rebeldes encabezadas por el gobernador. La provincia perdió así no sólo territorio y población sino también poder.

Este capítulo inicial se propone como un texto sintético que integre diferentes dimensiones de esa compleja historia y señale su inserción en el mundo más amplio que trasciende sus fronteras, ellas mismas en

constante redefinición. Las páginas que siguen constituyen, pues, un ensayo interpretativo, basado en buena medida en el resto de los capítulos que componen el volumen, así como en la producción historiográfica reciente. Esta versión, sin embargo, no necesariamente refleja las interpretaciones y tesis que cada uno de los autores ha desarrollado en su propia contribución.

UNA PROVINCIA

El objeto de esta historia es la provincia de Buenos Aires, pero al hablar de ella en 1820 es preciso hacer el esfuerzo de dejar de lado su imagen actual, la que hemos construido a través de nuestra experiencia y la que nos devuelve el mapa, para pensarla de nuevo. Si la silueta territorial que terminó por dibujarse hacia 1880 resulta mucho más cercana a la que hoy conocemos, reflejo de los cambios decisivos habidos en esos sesenta años, ello no debe ocultar sin embargo los muchos rasgos específicos de una era ya perdida que serían irreconocibles para nuestros ojos, como ponen en evidencia los mapas incluidos en el capítulo 2 de este volumen (Mapas 1, 2, 3 y 4).

La creación de la provincia fue, como señalan Marcela Ternavasio y Juan Pablo Fasano, un resultado entre otros posibles en el momento de la crisis del poder central creado después de la revolución de mayo bajo la égida de Buenos Aires. El destino de aquella iniciativa estuvo, para los contemporáneos, marcado por la incertidumbre y la precariedad de la hora. El futuro no dependía solamente de la voluntad y la decisión de los porteños, sino que estaba estrechamente vinculado a lo que pasara en el resto de las nuevas provincias ligadas entre sí por lazos políticos y perspectivas inciertas de un orden institucional compartido.

En su década inicial de vida, esa relación se manifestó en todo su dramatismo cuando, una vez construido un régimen legal y político bajo el signo del reformismo ilustrado, que dio a la provincia cierta estabilidad institucional y prosperidad económica, su dirigencia encabezó un nuevo proyecto de unificación nacional centralizada. La propuesta y los intentos por imponerla encontraron la reacción combinada de resistencias externas, provenientes de las demás provincias, y de oposición interna, y fueron derrotados. Las provincias volvieron a su situa-

ción de autonomía en un marco confederado, delegaron en el gobernador de Buenos Aires la representación de las relaciones exteriores y se prometieron un congreso constitucional futuro que sin embargo se postergaría por varias décadas.

La provincia porteña funcionó, en los veinte años siguientes, bajo un orden político centralizado y estable comandado por Juan Manuel de Rosas; consolidó sus fronteras con las sociedades indígenas que hacia el oeste y el sur ocupaban territorios disputados por el estado bonaerense; desarrolló su economía apoyada en la expansión ganadera y el comercio exterior; y afirmó su hegemonía militar y política sobre las demás provincias.

Su predominio de hecho sería otra vez puesto en cuestión desde afuera y por la fuerza. Una coalición encabezada por el gobernador de la provincia de Entre Ríos —de la que participaron tropas de Corrientes y de las naciones vecinas del Brasil y el Uruguay, así como grupos políticos porteños exiliados— derrotó al ejército de Buenos Aires en 1852, produciendo el derrocamiento del régimen rosista. Pero esas alianzas resultaron efímeras y, frente a la posibilidad de perder autonomía y capacidad de control sobre el proceso de organización nacional que se iniciaba, las viejas y nuevas dirigencias porteñas optaron por separarse de la república federal recién constituida. Por casi diez años, la provincia de Buenos Aires funcionó como un Estado independiente, y desde ese lugar proyectó su influencia al resto y confrontó con el gobierno de la Confederación Argentina hasta derrotarlo.

Sólo entonces Buenos Aires se incorporó formalmente a la república como provincia a la par de las demás, pero ocupando de hecho una posición privilegiada por su poderío económico y su fuerza militar triunfante en el campo de batalla. A partir de ese momento, sin embargo, su posición entraría en conflicto con la aspiración creciente de concentración de autoridad y recursos en manos del Estado nacional. La Constitución de 1853 había introducido un cambio fundamental en la situación de todas las provincias. La instauración de un régimen federal significó que esos estados hasta entonces soberanos debían ceder parte de esa soberanía a una instancia de poder central con el que ahora deberían compartir su poder según lo establecido por la carta magna. Y si bien al principio las dirigencias porteñas triunfantes encabezaron el proceso de construcción estatal, el conflicto de intereses pronto fracturó

a esas mismas dirigencias entre quienes pretendían fortalecer el aparato del Estado y subordinar a las provincias, y quienes defendían a ultranza la autonomía de Buenos Aires.

Esa tensión atravesó las décadas de 1860 a 1880. En ese último año, el triunfo del ejército nacional sobre las fuerzas de Buenos Aires, la derrota de parte importante de la dirigencia local en manos de una alianza de grupos provinciales a los que no fueron ajenos algunos porteños y, finalmente, la federalización de la ciudad, marcaron un momento de inflexión en la definición de un Estado nacional que afirmaba su autoridad frente a la provincia más poderosa. Y si bien por varios años más la relación entre ambas partes seguiría siendo muy conflictiva, la provincia ya no lograría desafiar con éxito al poderío estatal.

Este breve recorrido presenta apenas una faz de la historia de la provincia, donde ella aparece en la relación con las otras provincias y con el Estado nacional, en las disputas en torno de los problemas de soberanía que se inauguraron a principios del siglo XIX pero no se resolvieron hasta las décadas finales de ese siglo. A lo largo de esas décadas la provincia no fue, sin embargo, igual a sí misma. Territorio, población, paisajes, representaciones: entre 1820 y 1880 los cambios afectaron todos los órdenes de la vida, en diferentes direcciones y con ritmos variables. Al mismo tiempo, esa provincia estuvo inmersa en relaciones con el resto del mundo, de manera que es imposible pensarla aisladamente, sin atender a su inserción nacional, regional e internacional. Si dar cuenta de esa trama compleja de relaciones y transformaciones resultaría una empresa inabarcable dentro de los límites de este capítulo, en lo que sigue se intentará una aproximación a ella desde tres direcciones, que refieren respectivamente a procesos, actores sociales y conflictos.

PROCESOS

Si nos situáramos en 1880 y miráramos para atrás, descubriríamos cuánto cambió materialmente la provincia de Buenos Aires en las seis décadas previas. Podríamos distinguir así, en el largo plazo, una expansión territorial sustantiva, un aumento de la población aun más notable, una modificación del paisaje rural —con el trazado de caminos y vías férreas, la fundación y expansión de pueblos, la plantación de árboles y cons-

trucción de cercos, la multiplicación y mejora de ganado lanar y vacuno y la introducción de nuevos cultivos— y un crecimiento urbano sostenido que se manifestó sobre todo en la transformación de Buenos Aires, entre otros cambios fácilmente perceptibles. Cada uno de esos rasgos visibles para nuestro observador retrospectivo fue el resultado de procesos complejos y no lineales, que involucraron condicionamientos estructurales y circunstancias coyunturales, contingencias, voluntades, decisiones, conflictos, y también, por supuesto, beneficios y costos para los diferentes actores involucrados. Una mirada más preocupada por cómo se lograron esos resultados llevaría al observador a preguntarse por todas estas dimensiones del cambio. Para iniciar ese recorrido, en esta sección se pondrá el acento en las características más generales de esas transformaciones.

Territorios

El aspecto más obvio a primera vista es, sin duda, la expansión territorial. Cinco veces se multiplicó la superficie inicial de la provincia en seis décadas, hasta alcanzar más de 300.000 kilómetros cuadrados en 1880. Junto con la extensión vino también la diversidad en materia de ambientes, climas, paisajes. No se trató, sin embargo, de un crecimiento continuo ni constante, sino que experimentó, como bien lo muestran varios capítulos de este libro (en especial los de José Mateo, Guillermo Banzato y Silvia Ratto), altibajos que resultaron de un avance y retroceso de la frontera. Pero ¿de qué frontera se trata? Si hubo una expansión, ésta tiene que haberse producido sobre territorio que hasta entonces no pertenecía a la provincia. En efecto, al sur y al oeste de las tierras inicialmente bajo dominio porteño se abría un espacio amplio habitado por diversas sociedades indígenas que disputaban entre sí y con la sociedad criolla el control sobre porciones variables de ese espacio. La frontera era así una franja amplia de territorio, variable, móvil, permeable, en la cual estas sociedades mantenían contactos entre sí, establecían intercambios comerciales, políticos y culturales, y desplegaban el uso de la fuerza para disputar tierras y poder territorial. Durante varias décadas, esta dinámica llevó a la provincia a ampliar y retraer sus dominios varias veces, y si bien con el aumento de su poder económico y

militar los avances sobre esa frontera se hicieron más firmes, no fue sino cuando el gobierno nacional tomó la decisión de poner todo su poder de fuego para lanzar una ofensiva contra las sociedades indígenas que Buenos Aires ensanchó definitivamente su territorio. Al mismo tiempo, su aspiración a extender aun más su soberanía para incluir tierras patagónicas fue frustrada por decisión estatal, pues el poder central decidió incorporarlas bajo jurisdicción federal.

Gentes

Si el territorio de la provincia se multiplicó por cinco, la población que lo ocupaba lo hizo por ocho. También en este caso, y como bien lo indica José Mateo en el segundo capítulo, ese crecimiento fue desigual en el tiempo y desperejo en el espacio, resultado de componentes muy diversos. De todas maneras, semejante aumento muestra que Buenos Aires fue siempre una provincia receptora de población, lo que le permitió crecer muy por encima de las tasas de reproducción normales para la época. En las primeras décadas del siglo, a la población esclava introducida por la fuerza se sumaron los migrantes de provincias vecinas y también los provenientes de ultramar, especialmente españoles. Más tarde fueron sobre todo los inmigrantes europeos —que venían de diferentes lugares de Italia, España, Francia, Gran Bretaña, entre otros, expulsados por procesos que poco tenían que ver con la Argentina y con Buenos Aires— y que, a partir de los años sesenta, llegaron a representar la mitad de los habitantes de la capital provincial y casi una cuarta parte de los de la campaña. Diversidad étnica y por lo tanto pluralidad cultural caracterizaron esa población, pero además, como los que llegaban eran mayoritariamente hombres jóvenes, su presencia afectó la estructura de edades y sexos por bastante tiempo.

Esta breve descripción es insuficiente, sin embargo, para dar cuenta del impacto de estos cambios para todos y cada uno de los involucrados, así como para la sociedad en su conjunto. Para un argentino del siglo XXI es difícil imaginar semejante turbulencia poblacional. El ritmo de crecimiento actual es mucho menor que entonces, como lo es también la cantidad de inmigrantes que ha recibido el país en épocas recientes. Así, para la década de 1870, cuatro de cada cinco porteños

adultos (varones) eran extranjeros, una proporción que se mantuvo hasta principios del siglo XX, pero que era mucho mayor que en las décadas previas. En la campaña, las cifras fueron bastante menores, pero no dejaba de sorprender a los criollos de entonces el descubrir paisanos irlandeses o peones italianos buscando trabajo, tomando en las pulperías, montando a caballo. Tanto entre los recién llegados como entre quienes tenían arraigo local, el choque de costumbres, lenguas y culturas despertaba recelos, alimentaba prejuicios, generaba resentimientos y contribuía a producir y reproducir situaciones de conflicto. La mezcla pronto fue una realidad, pero no se dio sin resistencias y contradicciones. La literatura y el arte, como muestran los respectivos capítulos de Gallo-Batticuore y Aliata-Munilla Lacasa, dieron cuenta de las complejidades de esa sociedad diversa en movimiento, que ofrecía oportunidades pero también presentaba dificultades y riesgos.

Estructuras

La atracción que ejercía la provincia para gentes de distintos orígenes y trayectorias se vinculaba estrechamente con otra dimensión fundamental del cambio decimonónico, el desarrollo de su economía. El mercado internacional tuvo un papel decisivo en este sentido, como también lo tuvieron, aunque en grado algo menor, los mercados del resto de las provincias y, más adelante, el interno de la propia Buenos Aires. Al calor de la demanda externa, la provincia se volcó primero a la ganadería vacuna y produjo cueros y carne salada para la exportación, y luego, hacia mediados de siglo, se convirtió en productora y exportadora mundial clave de lana de oveja, que alimentó la industria textil europea —francesa y alemana en particular— en expansión. No se hará referencia aquí a las trayectorias en materia productiva, de comercio, finanzas y transportes a lo largo de esas sucesivas etapas, claramente analizadas en los capítulos de Julio Djenderedjian, Roberto Schmit y Guillermo Banzato. Interesa, en cambio, poner en foco las modificaciones de la estructura económica en su conjunto y sus implicaciones sociales más generales.

Volvamos al observador de 1880. Para esa fecha, la economía de la provincia estaba netamente encaminada en la senda del capitalismo. Se trataba de un capitalismo cuyo núcleo principal no se hallaba en la in-

dustria, como ocurría por entonces en otras regiones del mundo, sino en el agro. La producción de lana y otros artículos de la ganadería ovina y vacuna constituían el motor del proceso de acumulación de capital que hacía andar a toda la economía, no sólo de Buenos Aires sino del país en su conjunto. En esa provincia se había ido conformando una estructura económica fundada en la propiedad privada de los factores de producción (medios de producción —en particular, la tierra—, capital y mano de obra) y orientada a la generación de ganancias que resultaban sobre todo del empleo de fuerza de trabajo asalariada en la producción para la exportación. Esta construcción no había ocurrido de un día para el otro, y el observador podría distinguir cómo, desde las primeras décadas del siglo, la campaña bonaerense fue mostrando signos de transformación que, aunque no de manera lineal ni continuada y con distintos ritmos según las zonas, se encaminaron en esa dirección.

Apropiación privada de la tierra y formación de un mercado de trabajo fueron dos procesos decisivos en una región donde previamente la tierra era un recurso abundante que en amplias zonas no requería de títulos de propiedad para su usufructo, y donde la fuerza de trabajo podía venderse por un salario, pero podía también ser usada por sus poseedores para su propio beneficio, trabajando por su cuenta o en familia, en actividades campesinas, en el arreo de ganados, en tareas artesanales, entre otras formas de subsistencia. El atractivo de una creciente demanda externa movilizó recursos y ambiciones empresarias, y quienes contaban con capital en otros rubros o con influencias que podían brindárselo se volcaron hacia el agro en búsqueda de beneficios. Los gobiernos provinciales, en parte vinculados a esos intereses empresarios, en parte atraídos por la posibilidad de crecimiento económico y por lo tanto, eventualmente, de mayores ingresos fiscales, diseñaron y pusieron en marcha instrumentos destinados a crear mercados. La tierra se distribuyó primero a través de la enfiteusis, pero más tarde se vendió (y se regaló) a particulares, contribuyendo así a la conformación de un mercado libre de ese recurso. También se buscó incrementar su oferta a través de la incorporación de territorios de frontera, un proceso que como vimos tuvo sus altibajos pero terminó sumando grandes superficies de muy diferentes calidades al mercado. En cuanto a la fuerza de trabajo, se instrumentaron medidas destinadas a aumentar la oferta de mano de obra, tanto por

la vía de su canalización hacia el trabajo asalariado, a través de la instauración de mecanismos coercitivos como la obligación de la papeleta de conchabo y la persecución de los “vagos y malentretidos”, como por la vía del aumento en el número de trabajadores, a través del fomento de la inmigración.

El acceso a estos factores de producción facilitó la ampliación de una clase de empresarios rurales que, ya como resultado de la inversión de capitales provenientes de negocios previos, sobre todo en el comercio, ya como efecto de un proceso acumulativo en actividades agrarias, se convirtió en una burguesía crecientemente afluente y dinámica. La relativa abundancia de tierra de gran fertilidad y precio bajo (en comparación con otros lugares de producción equivalente), junto a una estrechez en la oferta de mano de obra (que tendía a ser escasa en relación con los picos de demanda) y a la falta de sistema financiero eficiente llevaron a los empresarios a preferir unidades de producción relativamente extensas, que permitían mayor flexibilidad en el uso de esos recursos escasos. Así fue que las estancias —tanto vacunas como las dedicadas al ovino— fueron en Buenos Aires más extendidas que sus pares en otros lugares del mundo. Ello les permitía combinar el empleo de mano de obra asalariada con el otorgamiento de tierras y animales a trabajadores por cuenta propia que los explotaban compartiendo gastos y ganancias con el estanciero. El predominio de este sistema basado en la gran propiedad no impidió, sin embargo, la existencia de empresas más pequeñas de criadores ganaderos o de ovejeros que se manejaban básicamente con mano de obra familiar, y sólo en ocasiones recurrían al trabajo asalariado. También eran unidades medianas y pequeñas las que se ocupaban en la producción de cereales, hortalizas, lácteos y otros bienes para consumo interno.

La actividad de punta y que brindaba mayores beneficios fue, a partir de mediados de siglo, la producción lanar. Debido a la fertilidad de la tierra, y a pesar de los altos costos relativos de la mano de obra y del capital, costaba mucho menos criar una oveja en la Argentina que en otros países productores de lana, como Australia por ejemplo. Los precios internacionales eran, sin embargo, semejantes para todos, de manera tal que, si bien la lana argentina cotizaba a precios algo más bajos, de todas formas rendía beneficios muy altos. Éstos no favorecían sólo a los productores, sino que se distribuían en toda la cadena que iba desde la

puerta de la estancia o granja hasta el mercado de destino. Sus eslabones eran muchos; entre ellos, los encargados de la comercialización, quienes con frecuencia también se ocupaban de la financiación, y los involucrados en el transporte —por carros y carretas, ferrocarriles, barcos— se quedaban con buena parte del excedente. La disputa por la distribución de los beneficios de la exportación ha sido una constante en la historia argentina. Los empresarios más grandes de la época resolvían la cuestión combinando actividades en la producción y el comercio, de manera de maximizar posibilidades de ganancia y minimizar riesgos.

El motor del crecimiento económico era el agro, pero su propia expansión dependía de la capacidad para generar circuitos comerciales, mejorar los transportes y el puerto, crear bancos que canalizaran capitales para la inversión. En la época de oro del lanar hubo así una transformación sustantiva en todos esos rubros, como bien lo muestran los capítulos de Djenderedjian y Schmit ya mencionados. Si el campo era el lugar de origen de la producción y Europa su destino, la ciudad de Buenos Aires era el sitio de almacenamiento y vía obligada de salida de los artículos de exportación, pero también de entrada de los inmigrantes proveedores de fuerza de trabajo, de los bienes de capital utilizados en la cadena exportadora y de los bienes de consumo para la población trabajadora en ciudad y campaña. También era residencia temporaria o estable de muchos de quienes participaban de esa cadena, desde propietarios de estancia y administradores de casas de comercio hasta empleados, peones y jornaleros ocupados en una miríada de actividades vinculadas al comercio de exportación.

El crecimiento de la ciudad pronto generó a su vez sus propias necesidades y aumentó las dimensiones del mercado interno para los productos agrícolas así como para los bienes de consumo importados y las manufacturas locales, también ellas favorecidas por la demanda interna. La estructura de la producción y el comercio en la ciudad se fue diversificando en relación con las primeras décadas del período. Convivían en ella comercios y talleres que usaban sobre todo mano de obra familiar con empresas más grandes que contrataban trabajo asalariado y se organizaban en forma capitalista. La migración de trabajadores entre ciudad y campaña se convirtió en un rasgo característico de este período, que favoreció la mano de obra no especializada dispuesta a aprovechar las oportunidades de un mercado de trabajo inestable y móvil.

En suma, hacia 1880 el perfil capitalista de la estructura socioeconómica de la provincia se había afirmado, y el crecimiento seguía los imperativos de ese sistema. Las ventajas de la producción pampeana permitieron, por un tiempo, que la acumulación de sustanciosas ganancias en manos empresarias no estuviera reñida con una relativa apertura de oportunidades para sectores que se ubicaron en el medio de la pirámide social y aun para ciertas capas de trabajadores. A lo largo de estos sesenta años, los trabajadores fueron perdiendo independencia y libertades, canalizados cada vez más hacia el mercado. Al mismo tiempo, en momentos de escasez de mano de obra, se abrieron algunas oportunidades para el ahorro y el ascenso social, que sirvieron como aliciente a miles de europeos que, atraídos por esa posibilidad, se lanzaban a la aventura de la inmigración. Los resultados muchas veces no respondieron a esas expectativas, pero el sueño de una vida mejor opacaba los riesgos que esa apuesta implicó para la mayoría.

El sistema así diseñado produjo sin duda crecimiento económico y complejización social. Pero también resultó muy vulnerable. La dependencia del mercado internacional regido por condiciones que poco tenían que ver con la Argentina llevó a sucesivas crisis que repercutieron en la vida económica y social de la provincia. La gran expansión de largo plazo observable en 1880 no debe, pues, ocultar los costos tanto estructurales como coyunturales de la forma en que ésta tuvo lugar.

Estado

El aparato estatal provincial y más tarde el nacional no fueron ajenos a este proceso, y a lo largo de todo el período hubo una intervención consistente con la voluntad oficial de fomento al modelo de capitalismo agrario y exportador que se venía perfilando. Pero el Estado no fue solamente un promotor de ese modelo sino que tuvo una actuación mucho más amplia y diversificada.

En 1820 no existía —prácticamente— organización estatal alguna en la provincia, pero a partir de entonces se formó una administración central que comenzó siendo muy precaria y ganó fuerza en los años siguientes. Desde ese lugar, una dirigencia muy influida por los principios del Iluminismo y los preceptos del más moderno Utilitarismo, puso en marcha

un conjunto de acciones destinadas a dotar al incipiente Estado provincial de los instrumentos legales e institucionales necesarios para desarrollar un ambicioso programa de reformas. Casi todos los capítulos de este libro analizan esas reformas en sus diferentes niveles, por lo que aquí sólo se enumerarán las principales: en materia de organización institucional y política, la puesta en funcionamiento de los poderes del Estado —gobernador y ministros, Sala de Representantes, aparato judicial, supresión de los cabildos—, la reorganización militar, el ordenamiento fiscal y de la hacienda pública, y el dictado y la puesta en vigencia de la ley electoral; en materia de fomento económico, la ley de enfiteusis y el reparto de tierras públicas, las medidas destinadas a disciplinar la fuerza de trabajo, y la creación del Banco de la Provincia de Buenos Aires; en el plano social y cultural, un amplio conjunto de disposiciones destinadas a modernizar esos aspectos, a partir de una intervención estatal en el plano de la educación, la promoción de nuevas formas de sociabilidad y la expansión de la prensa, el fomento de las artes y la reforma urbana, además de aquellas orientadas a disminuir el poder social e institucional de la Iglesia Católica.

No todas estas políticas fueron exitosas ni gozaron de amplios consensos. Sin embargo, muchas de las leyes e instituciones establecidas en esos años se mantuvieron por largo tiempo. También entonces se estableció un patrón de financiamiento estatal que perduró por cuatro décadas: para sostenerse, el gobierno recurrió en primer lugar a los ingresos de la aduana porteña, en particular a los impuestos a la importación, y en segundo lugar al crédito interno y externo, para cubrir el endeudamiento fiscal recurrente. Sólo cuando la aduana pasó a jurisdicción federal a principios de la década de 1860 la provincia debió buscar otras fuentes de recursos. Por su parte, los cambios políticos e institucionales afectaron una y otra vez el proceso de formación del aparato estatal, de manera tal que no hubo un camino directo que llevara a su afirmación progresiva, sino un recorrido bastante más sinuoso.

Así, por ejemplo, luego de la derrota de la dirigencia reformista a finales de los años veinte, la administración estatal provincial consolidó sus acciones en algunos planos, como el de la distribución de tierras, la administración de la justicia y de control de la mano de obra, y avanzó en otros, como el fortalecimiento militar y el avance y la “pacificación” de las fronteras con las sociedades indígenas, a la vez que prestó mucha

menor atención a aspectos tales como la educación, que quedaron al margen de las políticas públicas. El nuevo recambio de régimen producido en 1852 que desembocó en la autonomía de la provincia de Buenos Aires volvió a afectar la administración estatal, a cargo de una dirigencia renovada que proclamaba su filiación con la etapa de los años veinte y procuró imitarla en varios terrenos. En ruptura con la tradición rosista, se dio su propia constitución y reorganizó el aparato estatal en sintonía con ella. Al mismo tiempo, en un período en que la expansión de las exportaciones agropecuarias mejoró los ingresos fiscales, la provincia afirmó su supremacía en materia económica frente a la Confederación, y pudo sostener así los crecientes gastos militares que insumía el conflicto entre las dos partes.

El triunfo en ese plano y la unificación tuvieron variadas consecuencias para la administración estatal bonaerense, que perdió muchas de las ventajas del aislamiento. En primer lugar, la aduana pasó a jurisdicción federal y aunque la administración federal se comprometió a subsidiar el presupuesto de la provincia por cinco años, pronto ésta tuvo que depender de otros ingresos —como los impuestos directos a la tierra y las propiedades— y de los préstamos y operaciones monetarias del Banco de la Provincia, que pasó a tener un papel importante en el financiamiento estatal. En segundo lugar, la creación de un Estado nacional significó que algunas políticas y acciones que antes estaban exclusivamente en manos de las provincias, como la cuestión de la frontera o la organización militar, por ejemplo, ahora quedaban repartidas, compartidas o fragmentadas entre dos administraciones. Los roces entre el gobierno nacional y el de Buenos Aires en torno de estas cuestiones fueron una constante de estos años, pues si bien había consenso respecto de algunos objetivos generales comunes, las disputas en torno de los caminos a seguir para alcanzarlos y a quién correspondía pagar los costos involucrados estuvieron a la orden del día.

El observador de 1880 se encontraría así frente a este panorama de un Estado provincial que había alcanzado cierto grado de organización y competencias, y que contaba con instrumentos desarrollados de funcionamiento, pero que a la vez competía con el Estado nacional en una confrontación crecientemente desigual, pues la administración central se consolidó y se colocó por encima de las provinciales, incluyendo la de Buenos Aires.

ACTORES SOCIALES

Estos procesos estructurales de ampliación territorial, crecimiento de población, organización capitalista de la economía y formación del Estado provincial, observables en el largo plazo, fueron protagonizados por los hombres y mujeres de la provincia, creadores y a la vez criaturas de la transformación. Más allá de sus actuaciones individuales, interesan los lugares que ocuparon y las relaciones sociales que establecieron entre sí, en el seno de una sociedad dinámica, que mostró cambios sustantivos a lo largo del siglo XIX.

Hacia 1820 habían pasado ya diez años de la revolución de mayo y desde entonces muchas cosas habían cambiado en la sociedad porteña. Las dirigencias revolucionarias habían tomado medidas destinadas a romper con el orden colonial. Es habitual señalar que en esta región de frontera del Imperio español, alejada de los centros que durante siglos habían generado las mayores riquezas para la Corona, ese orden era más flexible, menos estratificado que en el Virreinato de Nueva España (México) o en el del Perú. De todas formas, ello no la eximía de las rigideces y desigualdades impuestas por el sistema de castas y de privilegios corporativos. A partir de 1810, la introducción del principio de igualdad ciudadana fundada sobre derechos así como las movilizaciones de hecho desatadas por las guerras fueron paulatinamente horadando las jerarquías tradicionales, aunque muchos rasgos del antiguo orden social perduraron por largo tiempo. La esclavitud, por su parte, no fue abolida, y aunque la libertad de vientres disminuyó la población sometida, hubo esclavos en Buenos Aires hasta los años sesenta. A pesar de esas continuidades, se podría afirmar que los cambios revolucionarios afectaron a todos y cada uno de los habitantes del Río de la Plata, cuyos lugares en el mundo fueron sacudidos por la ruptura del vínculo colonial, por la materialidad de la guerra y la disrupción de las relaciones sociales que la acompañó, y por las nuevas formas de organización política.

Estos movimientos no eliminaron por cierto las diferencias y desigualdades, aunque redefinieron parcialmente sus fundamentos y sus límites, y se hicieron menos rígidas. El observador situado en 1880 que volviera su mirada hacia atrás descubriría que sesenta años antes la principal distinción social entre los habitantes de Buenos Aires se daba entre la “gente decente” y la “plebe”. Esta división era reconocible para

los contemporáneos, aunque no sea fácil para nuestro observador y para nosotros definir los criterios que la regían y que combinaban referencias a la situación económica con connotaciones de tipo social, étnico y cultural de cada individuo y de su entorno familiar. Ambos conjuntos a su vez reconocían subdivisiones internas, de límites móviles. Comerciantes de diferente calibre, propietarios de tierras y de solares urbanos, profesionales, funcionarios estatales, oficiales del ejército, dueños de talleres y de empresas de transporte, todos ellos se reconocían como "decentes". Artesanos y pulperos, hortelanos y ganaderos menores podían caer en una u otra categoría, mientras que los trabajadores y trabajadoras a sueldo o cuentapropistas sin capital, los peones y jornaleros urbanos y rurales, soldados, y por supuesto los esclavos formaban el grueso de la plebe, cuyos integrantes eran mayoritaria pero no exclusivamente mestizos. Eran esferas distintivas que, si bien de límites permeables y cambiantes, permitían una sencilla y rápida ubicación de cada quien en el mundo y alimentaban las relaciones entre ellos. Lazos verticales teñidos de paternalismo y deferencia conectaban a los de arriba y los de abajo, en vínculos con frecuencia atravesados por tensiones cotidianas que podían desembocar en conflictos de mayor envergadura.

Estos actores sociales fueron los protagonistas visibles hacia 1820, participantes activos de las transformaciones que se dieron a partir de entonces. Fueron comerciantes y propietarios de tierra quienes llevaron adelante el proceso de inversión en la economía agraria, a partir de la explotación de una plebe canalizada al mercado de trabajo por diversos mecanismos estatales y privados de atracción, coerción y disciplinamiento. Fueron comerciantes de la ciudad, talleristas, artesanos, personal doméstico, peones y jornaleros quienes dieron densidad a la actividad urbana. Y finalmente, fueron hombres provenientes de distintos estratos de la "gente decente" —algunos pertenecientes a sus sectores más ricos, otros, quizá la mayoría, de menor rango social— los que comenzaron a formar una capa de administradores y políticos que darían forma al aparato del Estado.

La dinámica de la expansión, sin embargo, pronto fue reformulando las categorías iniciales, para dar lugar a una mayor complejidad de las tramas de pertenencia social. La aceleración del proceso de acumulación de capital favoreció a algunos más que a otros, creando diferencias en materia de patrimonio, fortuna y capacidad de enriquecimiento an-

tes desconocidas en esa magnitud. Una gran burguesía agraria, vinculada a la tierra pero también al comercio de exportación, fue ocupando el pináculo de la pirámide social. Los beneficios del crecimiento se extendieron también a sectores algo menos prominentes, pero que tanto en el propio agro y en el comercio como en otras actividades vinculadas a la economía de exportación fueron funcionando como capas sucesivas de esa nueva burguesía. Extranjeros que llegaban con dinero propio o que a través de una inserción exitosa en los circuitos tanto urbanos como rurales en vigencia lograban hacerse de un capital inicial para invertir se sumaron a esas capas. Y más tarde también lo harían quienes provenientes de otras provincias encontraban en Buenos Aires un terreno fértil para la inversión. Muchos porteños de fortuna, por su parte, buscaron expandirse más allá de los límites provinciales y lo hicieron con bastante éxito.

Con frecuencia, las estrategias sociales no se definían en términos individuales sino familiares. Las familias buscaban maximizar sus oportunidades a través de distintos caminos, desde las alianzas matrimoniales hasta la diversificación de riesgos, ubicando a cada hijo o hija en una senda diferente. La actividad profesional se encontraba entre los caminos posibles. No se necesitaba tener gran fortuna para transitar los colegios nacionales o la universidad, por lo que la vía profesional se abría también a las familias menos pudientes del amplio universo burgués, tanto de Buenos Aires como del resto de las provincias. El destino de muchos de estos hombres eran la burocracia estatal y la política, terrenos que se expandieron en estas décadas y se desarrollaron con creciente autonomía del mundo privado.

La ampliación y diversificación de las clases propietarias y letradas fue redefiniendo los criterios de pertenencia y distinción. Se desarrollaron nuevas prácticas de sociabilidad —analizadas con detalle en el capítulo de Pilar González Bernaldo— que fueron inicialmente inclusivas en su cobertura, y hombres (y también mujeres) de fortuna podían compartir espacios de ocio, entretenimiento y conversación con quienes provenían de estratos no tan encumbrados de la burguesía local. Bailes, teatros y cafés, pero también clubes sociales, de recreo y de deporte, logias masónicas, sociedades culturales y hasta asociaciones más ligadas a la producción, como la Sociedad Rural Argentina, podían reunir un espectro relativamente amplio de gentes, desde grandes banqueros, comer-

ciantes y estancieros hasta profesionales y publicistas, tanto argentinos como extranjeros. Con el tiempo, se fueron trazando líneas más precisas de distinción entre sectores del mundo burgués, líneas que hasta 1880 habían resultado en buena medida permeables.

Los bordes inferiores de ese mundo, por otra parte, se confundían con un campo también en expansión, compuesto por quienes se encontraban en los escalones intermedios de la pirámide social. El dinamismo que resultaba del crecimiento y la diversificación de la economía abrió nuevos lugares tanto en el campo como en la ciudad, donde se ubicaron hombres y mujeres que buscaron colocarse por encima de las clases trabajadoras. Podían dedicarse al comercio al menudeo, a la producción rural —ovejeros, criadores, quinteros, agricultores—, a la dirección de algún taller manufacturero o artesanal, a la enseñanza, a los empleos en oficinas públicas o privadas, a algunos oficios especializados, entre otras profesiones que brindaban ingresos regulares y posibilidades de ascenso. De límites móviles hacia arriba y hacia abajo, esta capa social no tenía espacios exclusivos de sociabilidad, aunque muchos de sus integrantes fueron actores decisivos en la creación de asociaciones, periódicos, clubes, logias, y sobre todo sociedades de ayuda mutua de mayor alcance, que atraían también a integrantes de las clases trabajadoras.

Con ese término impreciso hacemos referencia aquí al universo heterogéneo de quienes vivían sobre todo del trabajo manual asalariado o de su trabajo autónomo pero sin capital propio. Todavía los de arriba usaban el término “plebe” para referir a estos sectores, pero éste resultaba cada vez menos adecuado para dar cuenta de la diversidad de actores involucrados. Ciudad y campaña albergaban ahora a una población trabajadora de orígenes étnicos todavía más diversos que los de antaño, pues en la segunda mitad del siglo cambiaron el origen y la escala de la inmigración. El trabajo asalariado había ganado espacios, y se habían multiplicado las ocupaciones, a la vez que la dinámica del mercado laboral aumentaba los requerimientos de trabajadores no especializados, de peones y jornaleros dispuestos a moverse entre el campo y la ciudad y entre actividades. Al ritmo de una demanda de mano de obra en crecimiento pero sujeta a fuertes fluctuaciones estacionales y periódicas caídas en tiempos de crisis, la mayoría de los trabajadores oscilaban entre períodos de empleo sostenido y salarios aceptables y épocas de desempleo, incertidumbre, riesgos. El cuentapropismo muchas veces operó como

una alternativa al empleo formal, y los trabajadores autónomos tuvieron una presencia destacada en estos años. Las mujeres recurrían con frecuencia a esa modalidad como planchadoras, costureras y lavanderas, entre otros oficios, para sostener sus hogares o contribuir al ingreso familiar. Este mundo del trabajo se confundía por arriba con el de los sectores intermedios, y por abajo orillaba con el de quienes eran vistos cada vez más como marginales: “vagos”, prostitutas y ladrones que la orientación disciplinadora del Estado llevaba a condenar y perseguir.

Las clases trabajadoras tuvieron circuitos propios de sociabilidad a la vez que participaron también de tramas más amplias de contactos e intercambios. La pulpería típica de las primeras décadas fue dejando paso, sobre todo en la ciudad, a otros espacios populares de reunión como fondas y cafés, analizados por Pilar González Bernaldo. Las “sociedades africanas”, por su parte, que congregaban a la importante población urbana de ese origen, esclava y libre, declinaron hacia mediados de siglo, cuando otras modalidades de asociación ganaron aceptación en el conjunto de los sectores populares. La principal entre ellas fue la sociedad de ayuda mutua, que proliferó en las décadas siguientes.

Estas asociaciones se organizaban por afinidad nacional o étnica, y por oficio, y reclutaron sus miembros no sólo entre las clases trabajadoras. Así, los italianos que se asociaban a *Unione e Benevolenza* o los españoles de la Sociedad Española de Socorros Mutuos provenían de diferentes capas sociales dentro de la colectividad, mientras que las sociedades por oficio reunían a quienes se desempeñaban en diferentes niveles dentro de una misma profesión. Sus actividades así como sus demandas no remitían estrictamente al origen de clase de sus miembros sino a aquellas que resultaban de sus necesidades comunes. Esta convivencia fundada sobre el principio de solidaridad entre pares formaba parte de un ideal ampliamente compartido que veía en el asociacionismo un mecanismo fundamental de difusión de hábitos de civilidad y “civilización”. Pero si bien las sociedades de ayuda mutua se constituían bajo el signo de la igualdad, en la práctica su funcionamiento no excluía relaciones desiguales entre los miembros y la consolidación de liderazgos limitados a quienes provenían de capas medias o de los sectores más acomodados entre los trabajadores.

Esa coexistencia de gentes de diferente pertenencia social en un mismo espacio asociativo se daba también en otro ámbito muy diferente de

sociabilidad, el formado en torno de la actividad político-partidaria. En este plano, desde los años veinte en adelante hubo diferentes formas de organización que involucraron a muy distintos sectores sociales. Y si bien la sociabilidad de elite tuvo un papel importante en la gestación y promoción de candidatos y en el apoyo o el cuestionamiento de quienes llegaban al poder, la creación de organizaciones más amplias fue la clave para ganar el poder y mantenerlo. Así, bajo diferentes nombres y con distintos formatos, funcionaron redes electorales de estructura piramidal que articulaban una base mayoritariamente integrada por hombres provenientes de las clases trabajadoras con sucesivas capas de dirigentes de diferente nivel social. Las milicias, por su parte, como lo muestra Alejandro Rabinovich, operaban de manera semejante. Ambos mecanismos constituyeron espacios de sociabilidad plebeya y popular, integrados en tramas más abarcadoras de relación vertical que incluían también a hombres de otras ubicaciones sociales.

En suma, hacia 1880 Buenos Aires albergaba una sociedad dinámica, inestable, en transformación, en la que se superponían viejas y nuevas relaciones y desigualdades y se perfilaba una estratificación compleja. Las relaciones de explotación económica, dominación política y control social estaban en plena redefinición. Sobre los viejos vínculos y tensiones que articulaban el tejido social en la primera mitad del siglo comenzaron a desarrollarse otros de nuevo tipo, difíciles de comprimir en la previa polarización entre gente decente y plebe.

CONFLICTOS

Al observador ubicado en 1880, un año pródigo en enfrentamientos, no se le podía escapar hasta qué punto los grandes procesos de cambio sintetizados arriba, protagonizados por actores sociales en transformación, habían estado atravesados por tensiones y conflictos. Algunos terrenos de confrontación se remontaban a la década de 1820 y todavía mantenían protagonismo. Tal era el caso, por ejemplo, de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, como analiza Roberto Di Stefano. Éstas habían pasado por diferentes etapas y en 1880 volvían a tensarse en función de una potente voluntad política estatal secularizadora y una reacción clerical de fuertes contenidos antiliberales. Otras contiendas, en

cambio, que habían sido motivo de duros combates, parecían resueltas, como la que refería a la frontera con las sociedades indígenas. El Estado nacional había avanzado de manera resuelta en la eliminación de la llamada "cuestión indígena" a través de una campaña que derrotó militarmente a esas sociedades y destruyó las bases de su existencia cultural y social autónoma. Por entonces surgían también problemas nuevos, como por ejemplo los que referían a las tensiones culturales que resultaban del proceso inmigratorio y de modernización social, y cuyos términos y resultados era difícil predecir.

Por otra parte, 1880 mostraba algunos signos novedosos en materia de conflicto social. La confrontación explícita entre sectores sociales diferentes no fue un rasgo característico de la Buenos Aires que se conformó a partir de 1820. Plebe y gente decente convivían en su profunda desigualdad, en relaciones donde la tramitación de las tensiones cotidianas no impedía que se produjeran episodios puntuales de rebeldía de los de abajo y abierta represión de los de arriba. La afirmación de relaciones sociales capitalistas contribuyó a una mayor fragmentación social, que, a la vez que profundizó desigualdades entre las puntas, creó eslabones intermedios que de alguna manera amortiguaron los efectos del cambio. El conflicto cotidiano involucraba a las instituciones estatales disciplinadoras y represivas, y algunos reclamos en clave social alcanzaron estado público. Pero en la arena política las cuestiones sociales no tuvieron manifestación explícita, y aunque hubo grupos partidarios que lograron mayor arraigo popular que otros, los antagonismos no giraron sobre ese eje. Para 1880, sin embargo, algunos de esos rasgos comenzaban a cambiar, en especial en el mundo urbano. La década de 1870 vio las primeras huelgas obreras, organizadas por trabajadores que así decidían llevar su reclamo al espacio público, aunque la representación política de clase no habría de formalizarse hasta algunos años más tarde.

Si bien los problemas de la Iglesia y el Estado, la frontera, los antagonismos sociales, las tensiones culturales y muchos otros constituyeron motivos recurrentes y destacados en el debate público, los principales combates en torno del poder giraron sobre otros ejes que partieron a las dirigencias de Buenos Aires y proyectaron su potencial divisivo sobre el resto de la sociedad. Esas luchas se libraron en varios terrenos y movilizaron diferentes instrumentos y mecanismos de acción política que iban desde los más públicos de los debates en la prensa y la Legislatura,

las manifestaciones callejeras, las jornadas electorales hasta los que se llevaban adelante puertas adentro, en conversaciones y a través de la correspondencia. El uso de la fuerza, como lo muestra Rabinovich, formó parte de esas prácticas y alcanzó su expresión más virulenta en las revoluciones que tuvieron lugar en esos años.

Dirigencias y partidos

La insistencia sobre el protagonismo de las dirigencias requiere mayores precisiones sobre sus características y formas de funcionamiento. La revolución de 1810 produjo una ampliación y un recambio de quienes ejercían el poder político o aspiraban a hacerlo. La adopción de la soberanía popular como fundamento de la autoridad política y la instauración de formas representativas de gobierno fueron el punto de partida de la construcción de un nuevo orden republicano. Se dictaron normas, se crearon instituciones y se desarrollaron prácticas destinadas a alcanzar, sostener y reproducir el poder en ese marco. Desde muy temprano, esas operaciones llevaron a establecer formas de relación con sectores más amplios de la población que se fueron incorporando de diferentes maneras a la vida política. A partir de 1820, el ámbito provincial fue un terreno de ensayo y aplicación de mecanismos muy concretos en ese sentido. Hubo, por una parte, una creciente especialización y autonomización de las dirigencias políticas, que, si bien estaban conectadas con las clases económica y socialmente poderosas, no siempre pertenecían a sus capas más pudientes ni respondían directamente a ellas. El apoyo de esas capas era importante para acceder al poder y mantenerse, pero no era suficiente; había que movilizar también a otros sectores sociales para ganar elecciones, pelear las guerras, crear opinión. Y todo ello requería de capacidades bastante nuevas, que facilitaron el ascenso de quienes, entre el vasto y heterogéneo mundo de la "gente decente", podían desplegarlas y convertirlas en capital político. Ampliación, especialización y autonomía relativa fueron rasgos que se mantuvieron a lo largo de este período, y que se profundizaron hacia la segunda mitad del siglo, cuando el campo de acción para los dirigentes porteños sobrepasó decididamente los límites de la provincia.

Esa "clase política" de Buenos Aires estuvo atravesada por rivalidades y disputas en torno del poder, como analizan Fabio Wasserman, y Juan Pablo Fasano y Marcela Ternavasio en sus respectivos capítulos. A pesar de la vigencia de un ideal entonces compartido que privilegiaba la unidad del cuerpo político, veía en la política el campo de la manifestación y realización del bien común, y rechazaba la posibilidad de una representación plural del mundo social, las dirigencias se fragmentaron y compitieron entre sí por el poder. Esa división adoptó diferentes formatos pues, como resultaba contraria al principio de unanimidad que sostenía la mayoría, no había mecanismos institucionales establecidos para canalizarla. En la década de 1820, eran arreglos más bien informales y cambiantes entre dirigentes los que daban lugar a la formación de grupos en disputa. Durante el régimen rosista, en cambio, el principio de la unanimidad se impuso desde el poder mismo y quienes no pertenecían al partido de gobierno fueron excluidos de toda competencia. Más tarde, la organización en torno de clubes políticos y eventualmente de los llamados "partidos" canalizó la división entre grupos de institucionalización laxa pero de identidades y liderazgos reconocibles. Así, el autonomismo se nucleaba en torno de algunas figuras emblemáticas —entre las que se destacaba la de Adolfo Alsina—, de periódicos afines y de la invención de una tradición. Algo semejante ocurría con el nacionalismo encabezado por Bartolomé Mitre.

La historiografía se ha preguntado muchas veces por las causas de esas divisiones y ha querido encontrar en ellas desde intereses de clase hasta la manifestación lisa y llana de ambiciones y motivaciones individuales. La literatura más reciente, incluyendo los textos de este libro, muestran una situación más compleja que permite aventurar algunas hipótesis algo diferentes. Las dirigencias porteñas tuvieron en cada momento y aun a lo largo de estas décadas coincidencias implícitas y explícitas en varios terrenos. La forma republicana de gobierno fue una plataforma común a todas, aunque hubo importantes diferencias en cuanto a los mecanismos de su funcionamiento. Varias de las instituciones forjadas en la década de 1820 se mantuvieron a través de regímenes diferentes: la Sala de Representantes, posteriormente la Legislatura, como poder representativo por excelencia elegido por voto directo; el Poder Ejecutivo en manos de un gobernador designado por el Legislativo de manera indirecta; el sufragio masculino amplio; la ciudadanía armada

materializada en las milicias –posteriormente en la Guardia Nacional–, entre otras. Las constituciones provinciales de 1854 y 1873 innovaron en varios planos reflejando los consensos posteriores a la caída del rosismo.

En materia económica, por su parte, ningún grupo puso en cuestión la búsqueda de una inserción de la provincia en el mercado internacional a través de la expansión de la producción agraria para la exportación, y aunque se dieron debates en cuanto al proteccionismo y el librecambio, la distribución de la tierra y organización de los procesos productivos, la orientación capitalista que fue asumiendo el proceso gozó del favor general. Con la sanción de la Constitución Nacional de 1853, reformada en 1860, varias de esas metas compartidas aparecieron explicitadas en su capítulo IV, donde se asoció “la prosperidad del país” al “progreso de la ilustración” y al fomento de la instrucción, la inmigración, la industria, los ferrocarriles, la colonización de tierras, la importación de capitales extranjeros, entre otras propuestas (art. 67, inc. 16). De nuevo, ello no significó que no hubiera discusiones en torno de varios de los puntos centrales de ese consenso, tanto en Buenos Aires como en el resto del país. Así, los alcances y características de la educación, los mecanismos de promoción de la inmigración, las políticas de tierras, el papel del Estado en la expansión de los medios de comunicación –en particular, los ferrocarriles–, la protección o no de la agricultura, la ganadería y las manufacturas, las condiciones para la inversión de capital extranjero: todos estos temas fueron motivo de debate. Pero si bien a veces esas controversias resultaron apasionadas, en general no cristalizaron en posturas ideológicas radicalmente opuestas entre sí ni en posiciones inflexibles. Tampoco se superpusieron a los clivajes del ámbito político-partidario, y aunque circunstancialmente pudiera haber alineamientos en ese sentido, las divisiones entre grupos no se sostuvieron en forma consistente sobre esos puntos ni sobre una filiación sistemática con sectores específicos de las clases poderosas. Si durante mucho tiempo la historiografía entendió a Rosas como un representante de los estancieros o a Mitre como un hombre que respondía a los comerciantes porteños, hoy esa asociación aparece cuestionada en función de investigaciones que los muestran como figuras que, lejos de responder a esos u otros intereses sociales específicos, tenían su propia agenda.

En cuanto a las inclinaciones ideológicas, había por cierto diferencias individuales importantes entre quienes integraban las dirigencias, pero al mismo tiempo es posible detectar para cada momento lenguajes políticos que resultaron, en buena medida, compartidos. Liberalismo y republicanismismo en diferentes versiones se combinaron de maneras distintas creando un piso común de referencias que no tuvieron fuerte impugnación, como ocurrió en cambio en otras regiones de Hispanoamérica donde el pensamiento conservador operó como contrapeso de las formulaciones del liberalismo. Más aún, las controversias ideológicas no tuvieron una traducción directa en el mundo de la política partidaria, y aunque algunas agrupaciones, como los liberales, por ejemplo, hicieron gala de su afinidad con la tradición de ese nombre, su fidelidad a ella era tan poco ortodoxa como la de sectores del partido federal que también se reconocían en ese legado.

En suma, las divisiones y filiaciones partidarias de la mayor parte de estas dirigencias no respondían estrictamente a intereses económicos o fuertes identificaciones ideológicas o de clase. Tramas sociales, tradiciones familiares, afinidades y fidelidades personales o de grupo, oportunidades de inserción y ascenso político suelen brindar pistas más convincentes para entender las trayectorias y opciones partidarias de los dirigentes y sus seguidores. Pero ello no alcanza para dar cuenta de la dinámica política del período, de la construcción de agrupaciones que, a pesar de que resultarían inestables y cambiantes, se identificaban con tradiciones políticas más persistentes, y de la recurrente conflictividad entre fuerzas que disputaban el poder.

Pasiones políticas

El observador de 1880, con sólo mirar lo ocurrido en ese año, podría reconocer las cuestiones que todavía despertaban las pasiones políticas y que también habían alimentado el conflicto en Buenos Aires en las décadas precedentes. El foco de la controversia radicaba en la esfera política misma, donde se plantearon diferentes visiones para el presente y el futuro de la comunidad política provincial. El consenso que se alcanzó tempranamente en torno de la adopción de formas republicanas de gobierno no clausuró la discusión política. No había una manera

única de entender o construir la república y, a poco de andar, dos fueron las fuentes de mayor controversia: la que refería a la forma de funcionamiento del régimen político y la que remitía a la construcción de un orden nacional.

Comencemos por la segunda. El tema de las soberanías territoriales, las formas de organización nacional y el papel de la provincia de Buenos Aires, así como —una vez proclamada la república federal— las características del nuevo Estado central, estuvieron en la base de los clivajes políticos más importantes del período. Desde los primeros tiempos revolucionarios estos clivajes, en diferentes versiones, partieron a las dirigencias de Buenos Aires así como a las del resto de las provincias, y proyectaron su potencial divisivo sobre el resto de la sociedad. Hacia 1820, las pugnas de la primera década entre los partidarios de organizar el antiguo Virreinato en una moderna nación de soberanía única e indivisible con cabeza en Buenos Aires y quienes defendían las soberanías de los pueblos que lo habían integrado y reclamaban su autonomía se habían resuelto a favor de estos últimos. En el caso porteño, la dirigencia de la flamante provincia aplacó por algunos años esas rivalidades en pos de un aprovechamiento de la situación de relativo aislamiento que le habría de permitir expandir su economía, fortalecer sus instituciones y modernizar su sociedad.

Hacia mediados de la década de 1820, sin embargo, el problema de la organización nacional volvió a dividir las aguas, y fue el motivo de la gran disputa que fracturó a la dirigencia porteña en unitarios y federales. No obstante, el triunfo de estos últimos no terminó con el problema, que siguió vigente produciendo divisiones dentro del propio campo federal y contribuyendo a engrosar una oposición que ya no se limitó a los viejos unitarios. La derrota rosista y la sanción de la Constitución Nacional de 1853 modificaron los términos de la cuestión de las soberanías, en la medida en que —como vimos— ella creó un sistema de soberanía compartida entre un nuevo poder nacional y los estados provinciales. De allí en más, la disputa se focalizó en torno de cuáles serían los alcances y los límites del Estado central en construcción y de sus relaciones con las provincias. Esa cuestión atravesó los conflictos entre liberales y federales, entre autonomistas y nacionalistas y entre Buenos Aires, las demás provincias y el Estado nacional, y alimentó debates, confrontaciones electorales y enfrentamientos armados.

El otro gran tema de esas décadas fue el del cómo y el quién, esto es, el de las modalidades de gobierno bajo formato republicano y el de quiénes habrían de liderarlo. Esta cuestión abarcaba diferentes planos, desde el referido a las normas y a las instituciones de gobierno hasta el que remitía a las formas concretas de ejercicio del poder. A lo largo del período, aspectos tales como la división de poderes y la organización de cada uno de ellos —donde la cuestión de la justicia ocupó un lugar central, según demuestran Magdalena Candiotti y Melina Yangilevich—, la legislación electoral, la creación de municipalidades, entre otros, dividieron aguas y nutrieron las confrontaciones entre grupos. Pero fue la faceta más operativa de la vida política la que contribuyó decisivamente a dar a esos diferentes grupos perfiles propios y a sustentar sus rivalidades. A través de las prácticas de organización y acción política, de la construcción retórica y material de los repertorios de símbolos de identificación colectiva y, finalmente, de la formación de liderazgos fuertes, las principales agrupaciones forjaron sus respectivos contornos identitarios. Estos aspectos hacían al día a día de la política, pero también se convirtieron en estilos y tradiciones que funcionaron en buena medida por oposición, reforzando así el carácter confrontativo y muchas veces violento de la política de la época.

Así, por ejemplo, unitarios y federales, conformados inicialmente como grupos que, en el seno del Congreso de 1824, se enfrentaron en torno de la cuestión del centralismo y las soberanías provinciales, se convirtieron luego en agrupaciones partidarias en la lucha por el poder. No los separaban sólo los principios o los valores, o siquiera sus preferencias en materia institucional y normativa, sino también sus formas de hacer política concreta, los símbolos que eligieron para su identificación, los hombres que quedaron a la cabeza, y su antagonismo con el otro, el enemigo político. No se trataba, sin embargo, de organizaciones con estabilidad institucional o programa formalizado, a la manera de los partidos políticos posteriores, sino de agrupaciones laxas y variables, aunque a la vez claramente identificables para los contemporáneos. Y podían dividirse internamente y transformarse, lo que ocurrió tanto con los unitarios como con los federales.

Después de la caída de Rosas, las principales fuerzas se definieron como federales y liberales. Mientras que los primeros se ubicaban en el campo federal, en su vertiente antirrosista, los liberales se identi-

ficaron –aunque críticamente– con el legado unitario. Estas fuerzas se enfrentaron en el plano nacional no sólo por los principios que regirían la república, por la mayor o menor autonomía de las provincias y por el poder de Buenos Aires sobre las demás, sino que también lo hacían para imponer sus pautas y ubicar a sus hombres en el gobierno, así como en contra de los otros, que representaban una tradición que consideraban antagónica. De nuevo, no fueron partidos institucionalizados y estables. Así, los liberales se dividieron a partir del tronco común que sus dos partes, autonomistas y nacionalistas, reclamaron como propio, pero a la vez, y aun dentro de ese marco, propusieron proyectos de nación y forjaron estilos y liderazgos diferenciados. En la provincia, las rivalidades entre estas dos vertientes fueron intensas en las décadas de 1860 y 1870 y se desplegaron en las diferentes arenas de la lucha política, que ya no respetaba las fronteras de Buenos Aires.

Esa nacionalización de la política alcanzó un punto de inflexión hacia 1880. Para entonces, los federales se habían diluido como fuerza y como tradición específica, y una nueva constelación de grupos con sede en las diferentes provincias (el futuro Partido Autonomista Nacional) tomaba forma y forjaba una manera también nueva de hacer política que buscaba distanciarse de los estilos y los hábitos previos, en cualquiera de sus versiones. Buena parte de la dirigencia porteña se vio amenazada por esta fuerza que combinaba una propuesta clara de concentración de poder en el Estado nacional en detrimento de las provincias y en particular de Buenos Aires, una impugnación a los hábitos políticos anteriores, y una promesa de transformar las bases de una política que llevaba sistemáticamente a la confrontación. La revolución de 1880 fue un intento por parte de la vieja guardia porteña de resistir esas novedades, pero su derrota a manos de un gobierno nacional ya controlado por los “modernizadores” abrió el camino del cambio: fortaleció al Estado central frente a la provincia, desplazó a la dirigencia porteña del primer plano político y amputó a Buenos Aires su capital.

A partir de ese momento, las confrontaciones no se agotaron, por cierto, pero pasaron gradualmente a tener otros focos. La sociedad de fines del siglo XIX, tanto en Buenos Aires como en el resto del país, desplegó otras tensiones y otros conflictos. Las pasiones políticas ya no responde-

rían a los mismos motivos que nuestro observador de 1880 reconociera tan fácilmente en las décadas precedentes.

Llegamos así al final de un recorrido que pretendió integrar diferentes dimensiones de la historia de la provincia de Buenos Aires entre 1820 y 1880. Cada una de ellas es objeto de un desarrollo más amplio en los capítulos que siguen, que cubren muchos aspectos no explorados en este ensayo. Aquí he privilegiado algunas cuestiones sobre otras, no por su importancia relativa sino porque el relato que ofrezco se propone apenas iluminar desde diferentes ángulos una historia densa y polifacética. He buscado así mostrar la profundidad de los cambios habidos en la provincia en el período estudiado y su articulación compleja. No propongo, sin embargo, una gran clave explicativa que reduzca la diversidad de lo real a un todo estructurado a partir de alguna causa última, sino una interpretación que conecta varios planos y busca mostrar sus interrelaciones. Este ejercicio es, en ese sentido, deudor de la historiografía actual, de la cual el resto de este libro es un excelente ejemplo.